



EL NUEVO PAÍS

Estado violó derechos humanos

Se hace justicia a tres víctimas de la Lista Tascón

María Gabriela Cuevas*

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obedece al despido laboral del que fueron víctimas Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thaís Coromoto Peña por aparecer en la denominada *Lista Tascón*, en donde solicitaban, al igual que cientos de venezolanos, la activación de un referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez

El 30 de mayo de 2018 se hizo pública la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos¹ en el caso San Miguel Sosa y otras contra Venezuela².

Es la decisión de un caso concreto: la demanda de Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña contra el Estado venezolano. En esta sentencia, la Corte declaró responsable internacionalmente al Estado de Venezuela por la terminación arbitraria de los contratos laborales en virtud de los que desempeñaban labores en el Consejo Nacional de Fronteras (CNF), lo que se dio como consecuencia de una *desviación de poder* motivada por una *voluntad de represalia* en su contra *por haber firmado* una solicitud de referéndum revocatorio del *mandato del entonces presidente de la República* Hugo Chávez Frías, en un contexto de denuncias de represalias y persecución política.

Se declaró que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la participación política y libertad de pensamiento y expresión, en relación con el principio de no discriminación. Además, responsable por haber incumplido su obligación de garantizar los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo para

tutelar los derechos de las víctimas, y por la violación del derecho al trabajo.

Pero es una decisión que trasciende a estas tres víctimas, pues versa sobre acontecimientos vividos por el conjunto de la sociedad venezolana. En el tiempo en que ocurrieron los hechos, muchos venezolanos pendían del desarrollo de las noticias en torno a los sucesos a que se refiere esta sentencia.

El drama y la amenaza intimidaban a todo el que tuviera vínculo con el Estado y que pensara en poner en marcha el mecanismo previsto como derecho constitucional denominado refrendo revocatorio.

El caso es emblemático, pues:

...el despido arbitrario al que fueron sometidas... tenía la intención encubierta de acallar y desincentivar la disidencia política, pues fue instrumentalizado como factor ejemplarizante para que otras personas que ejercieron esa misma libertad se vieran amedrentadas de participar políticamente y eventualmente motivadas de manera ilegítima a retirar o 'reparar' sus firmas.³

Así mismo, muestra la situación vivida por muchas otras personas⁴, cuyos asuntos no lograron llegar ante instancias judiciales.

La sentencia resume así los hechos y el contexto alegado, que posteriormente declara probados:

La controversia del presente caso versa sobre una serie de alegadas violaciones de derechos de tres personas [...] como consecuencia de un alegado acto de desviación de poder. Se plantea que la terminación de sus últimos contratos temporales de servicios en marzo de 2004 fue una decisión formalmente encubierta con el 'velo de legalidad' de aplicación de una cláusula que contenía, según consideraron las autoridades judiciales y el Estado, una facultad discrecional del superior jerárquico para finalizar la relación contractual, incluso sin motivación. Sin embargo, se alega que ello realmente habría estado motivado por una voluntad de represalia por haber firmado una solicitud de referéndum revocatorio del mandato del entonces Presidente de la República en diciembre de 2003, en un contexto de denuncias de represalias y persecución política, en particular luego de haber aparecido sus nombres en la llamada 'lista Tascón'. Las presuntas víctimas interpusieron una acción de amparo constitucional y denuncias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, las cuales, según se alega, no habrían sido efectivas para declarar las violaciones de derechos y repararlas⁵.

La sentencia se refiere a la discriminación por motivos políticos como un acto contrario a la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero también contrario a la democracia:

En una sociedad democrática, la oposición política es consustancial y funcional a su existencia misma, por lo cual el haber sido percibidas como opositoras políticas por el hecho de la firma de la solicitud no debe ser considerado, en sí mismo, un problema bajo la Convención. Lo que sí sería incompatible con ésta es utilizar tal percepción para discriminarlas⁶.

Ahora bien, la sentencia además señala la responsabilidad del Centro Nacional Electoral (CNE) al entregar la información sobre los firmantes sin tomar medidas para asegurar la reserva de la información y la protección a los mismos:

En principio, el Consejo Nacional Electoral tenía, como ente rector en esta materia, la facultad y obligación de dar acceso a la información en su poder sobre los firmantes de la solicitud de activación de referendo, si quien la solicitaba era el propio funcionario cuyo mandato se pretendía revocar, en ejercicio de una garantía mínima del debido proceso en esa materia, pues podía estar legítimamente interesado en verificarlas. Sin embargo, [...] el ente electoral competente debía analizar si correspondía disponer que la información guardara algún carácter restringido, reservado, confidencial o privilegiado, bajo responsabilidad de quien la recibiera; es decir, si en ese contexto particular debía disponer medidas de salvaguarda para asegurar una protección mínimamente razonable a los firmantes...⁷

... Dadas las dimensiones y alcances que se dio a dicha *Lista Tascón*, en una página *web* bajo la calificación de un 'megafraude', es evidente que su creación y publicación tenía fines ulteriores a garantizar los derechos del funcionario revocable o de los solicitantes, pues la publicación de la identidad de los firmantes fue instrumentalizada con fines intimidatorios para desincentivar la participación y la disidencia política. Ello favoreció o propició un ambiente para la materialización de represalias, para la persecución política y la discriminación de quienes fueron entonces percibidos como opositores políticos al gobierno⁸.

Pero este asunto no evoca solo hechos del pasado. En efecto, la discriminación por motivos políticos se ha ido naturalizando en nuestro país. Esta sentencia debe servir como marco de referencia para el rescate de los valores democráticos.

La sentencia persigue la reparación a las tres valientes y perseverantes víctimas, pero a su vez, al declarar la verdad de los hechos es un acto de reparación para cada venezolano. Reafirma que hay normas internacionales e instancias que

están por encima de la arbitrariedad y el abuso de poder de quienes gobiernan nuestro país, aunque estas autoridades decidan ser indiferentes ante sus pronunciamientos.

La sentencia describe cuáles fueron las normas internacionales violadas al terminar arbitrariamente los contratos de trabajo de las víctimas, pero también dice a quienes detentan el poder que este no es ilimitado, y que llega el momento en que se exigen cuentas.

Un aspecto fundamental del procedimiento judicial es que en este se analizan las pruebas que presenta cada parte (las víctimas y la representación del Estado). A los jueces corresponde evaluarlas de manera imparcial, para determinar cuál es la verdad que deriva de ellas⁹.

Cada elemento probatorio, por separado, no habría sido suficiente, pero la suma de todos esos indicios permitió lograr el convencimiento de los jueces en favor de los principales alegatos de las víctimas.

Uno de los aportes trascendentales de la sentencia es el dejar registro de los hechos, eliminando la posibilidad de que el “relato oficial” oculte su ocurrencia y su magnitud, y termine por reducirlos al olvido.

Si bien a lo interno hubo algunas formas de reconocimiento de los hechos (con posterioridad a los mismos, el presidente de la República llegó a afirmar que la Lista Tascón debía dejar de usarse¹⁰, y la Fiscalía llegó a iniciar un procedimiento para que se investigaran los casos de discriminación por motivos políticos¹¹), esto no condujo a manifestación alguna de aplicación de justicia, ni de reparación a víctimas.

Así pues, antes de la sentencia la única realidad era la reiteración del ejercicio arbitrario y desviado del poder sin consecuencia negativa alguna.

La sentencia indica las responsabilidades del Estado, ordena que se lleven a cabo en el país las investigaciones pertinentes para identificar y, en su caso, procesar y sancionar a los responsables de los hechos de desviación de poder referidos en el caso¹² (no lo afirma la Corte, pero sí lo precisamos aquí: la investigación que determine la comisión de delitos sería un juicio que debería enfrentar José Vicente Rangel, en su carácter de presidente del CNF para entonces, y quien además era vicepresidente de la República); además ordena el pago de indemnizaciones compensatorias por daños materiales¹³ e inmateriales¹⁴ a las víctimas, y la publicación de la sentencia por un año en un sitio web oficial¹⁵ entre otras formas de reparación.

La sentencia es un símbolo de esperanza para los venezolanos. Fue un logro que se labró desde dentro de la institucionalidad venezolana y dentro del ser de personas concretas dispuestas a hacer valer su dignidad.

El recorrido que se siguió fue el de acudir a las instancias a las que las normas otorgan com-

petencia (esto tiene sentido, aunque en principio parezca inútil). La justicia internacional existe precisamente para, de manera subsidiaria, dar respuestas en los casos en que la justicia de los Estados yerra en ese deber esclarecer la verdad y aplicar las normas sobre derechos humanos.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

NOTAS:

- 1 Venezuela ya no está sujeta a la todas las competencias de la Corte, pues las autoridades públicas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, procedieron a la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 10 de septiembre de 2012, que entró en vigencia al cabo de un año. Las autoridades venezolanas denunciaron ese tratado que dio origen a la Corte, precisamente para afirmar que no creen en sus sentencias, ni están obligados a cumplirlas. Sin embargo, la sentencia que comentamos se refiere a hechos anteriores a esa estrategia oficial, y por tanto, formalmente los agentes del Estado tienen la obligación de cumplirla.
- 2 Ver texto de la sentencia y su resumen en: <http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm>
- 3 En el Párr. 141 de la sentencia que comentamos se destaca que se les sugiriera que la decisión de despedirlas podía cambiar si retiraban sus firmas. En Párrs. 146 y 147 se destaca que no fueron hechos aislados. En lo sucesivo, las notas en que se indican números de párrafos se refieren a esta sentencia.
- 4 Párr. 158.
- 5 Párr. 102.
- 6 Párr. 118.
- 7 Párr. 130.
- 8 Párr. 133.
- 9 En el Párr. 141 se señala cómo fueron valoradas grabaciones de conversaciones entre funcionarios públicos y una de las víctimas.
- 10 Párr. 147.
- 11 Párr. 67.
- 12 Párr. 232.
- 13 Párr. 238.
- 14 Párr. 240.
- 15 Párr. 233.